DERECHO PARA EL FIN DEL MUNDO *

Law for the End of the World

JOSÉ RAMÓN NARVÁEZ HERNÁNDEZ **

Fecha de recepción: 31/07/2024
Fecha de aceptación: 03/11/2024

Anales de la Cátedra Francisco Suárez
ISSN: 0008-7750, núm. 59 (2025), 85-101
<https://doi.org/10.30827/acfs.v59i.31398>

RESUMEN El derecho para el fin del mundo es una categoría epistémica de emergencia para generar consciencia sobre una postura filosófica que cada día adquiere más peso y que se sustenta en un hiperindividualismo que exacerba todo lo negativo de la modernidad, basándose en el miedo y fomentando una postura egoísta y altamente elitista.

Palabras clave: Comunidad Política, Constitucionalismo, Medio Ambiente, Desesperación, Filosofía del Derecho, Bienes Comunes, Cuidado Mutuo.

ABSTRACT Law for the end of the world is an emergent epistemic category to raise awareness of a philosophical stance that is gaining more and more weight every day and that is based on a hyper-individualism that exacerbates all the negatives of modernity, based on fear and fostering a selfish and highly elitist stance.

Keywords: Political Community, Constitutionalism, Natural Environment, Despair, Philosophy of Law, Common Goods, Mutual Care.

1. EL CONSORCIO CONSTITUCIONAL INTERPLANETARIO

El famoso constitucionalista canadiense Richard Albert anunció el primer día de abril de este año (2024), en su sitio de LinkedIn, lo siguiente:

Todo comenzó el año pasado, en junio de 2023, cuando me presentaron a Elon Musk aquí en Austin. Después de una reunión inicial en su oficina de SpaceX cercana, me invitó a una serie de reuniones de seguimiento en Washington, Palo Alto y la ciudad de Nueva York para discutir su visión de poblar Marte dentro de 20 años y su necesidad de ayuda para construir la infraestructura legal para la gobernanza en el planeta.

* Para citar/citation: Narvárez Hernández, J.R. (2025). Derecho para el fin del mundo. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez* 59, pp. 85-101.

** Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho. Escolar s/n, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México (México). Correo electrónico: iushistoria@gmail.com

Avancemos hasta la semana pasada. Después de meses de intensas, pero finalmente exitosas negociaciones, ahora puedo anunciar que he aceptado un nombramiento para servir en el Consorcio Constitucional Interplanetario.

La Corte Penal Internacional tendrá un amplio mandato para formular recomendaciones sobre la gobernanza del espacio ultraterrestre. Nuestra tarea más inmediata será crear un proyecto de Constitución para Marte.

La CPI tendrá 13 miembros permanentes en total, junto con 6 miembros rotativos. Voy a ser el presidente permanente. Algunos de los otros miembros permanentes incluyen a Chris Hadfield, Helen Sharman, Neil deGrasse Tyson y Yi So-yeon¹.

Así es querido lector, Albert y Musk preparan una Constitución marciana en el entendido claro está que alguien irá a habitar ese planeta en algún momento, lo anterior quiere decir que de alguna manera existe ya un plan alternativo a este mundo que usted y yo seguimos habitando junto con 8 mil millones de personas más; en otras palabras, se está elaborando un marco constitucional alternativo, un plan B; como si diéramos por perdido este mundo.

Lo anterior me hizo pensar que quienes nos quedaremos en la Tierra no tenemos un planteamiento para soportar lo que las personas más ricas y poderosas ya vieron con tanta claridad: el fin del mundo.

El derecho para el fin del mundo, como un concepto filosófico, es una categoría epistémica de emergencia para generar consciencia sobre una postura filosófica que cada día adquiere más peso y que se sustenta en un hiperindividualismo que exagera todo lo negativo de la modernidad, basándose en el miedo y fomentando una postura egoísta y altamente elitista (Lipovestky, 2008).

Podríamos decir que existen diversos fines del mundo, en este caso al menos dos, uno en el que algunos se salvan yéndose a otro planeta (o refugiándose en bunkers o plataformas marinas), y otro en el que miles de millones nos quedamos en la tierra para morir, destruyéndonos entre nosotros.

¿Un derecho para morir? Prefiero pensar en un derecho para vivir, para salvarnos, para salvar el planeta (Blomkamp, 2013).

1. Albert, R. (4 de julio de 2024). Special Announcement. Monday, April 1, 2024. I was not looking for another government appointment, but this one was impossible to turn down. [Post] LinkedIn.
https://www.linkedin.com/posts/richardalbert_special-announcement-monday-april-1-2024-activity-71805647376785856-aaou?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Lo que es claro, es que la urgencia, la emergencia, la necesidad —incluso la desesperación— serán elementos que estarán incorporados a la propuesta hermenéutica en su caso (Bauman, 2007) (Morton, 2021).

Definir qué características tienen estas categorías será importante; conocer el impacto dentro de las interpretaciones jurídicas también; pero, además, para generar una explicación proactiva, con un alto compromiso socioambiental.

2. LA DESESPERACIÓN COMO CATEGORÍA JURÍDICA

En el marco de un hipotético “derecho para el fin del mundo”, la desesperación podría surgir como una categoría jurídica fundamental para abordar los desafíos y dilemas éticos que plantearía un escenario de catástrofe global inminente. Esta noción jurídica tendría que ser cuidadosamente definida y desarrollada para atender a las complejas situaciones que caracterizarían un contexto de fin del mundo.

La “desesperación” se activaría ante la amenaza verificable de un evento apocalíptico que ponga en riesgo la supervivencia de la humanidad o de una parte significativa de ella. Este peligro debería ser concreto, inminente y de tal magnitud que justifique la aplicación de un marco jurídico excepcional, cuestión que, a mi parecer, ya está sucediendo si tomamos en consideración algunos datos, incluso de la ciencia², todo es cuestión de considerar nuestra relación epistémica con hiperobjetos como el calentamiento global y el cambio climático (Morton, 2021).

Aquí el tema es que la “excepcionalidad” que se entiende en el constitucionalismo occidental —quizá con raíces tan profundas y lejanas situadas en la concepción política romana—, como la concentración del poder en

2. Algunos de esos datos científicos son el cambio climático: la temperatura global ha aumentado aproximadamente 1.1 C desde la era preindustrial, los niveles de CO2 atmosférico superaron las 420 ppm en 2024, el nivel más alto en al menos 800,000 años, la tasa de aumento del nivel del mar se ha acelerado a 3.7 mm por año. Pérdida de biodiversidad: la tasa actual de extinción de especies es 100-1000 veces mayor que la tasa natural, cerca del 40% de los anfibios están en riesgo de extinción, se ha perdido aproximadamente el 68% de las poblaciones de vertebrados desde 1970. Deforestación: se pierden aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosque cada año, la selva amazónica ha perdido cerca del 17% de su cobertura original, la tasa de pérdida de manglares es 3-5 veces mayor que la pérdida promedio de bosques. Acidificación oceánica: el pH de los océanos ha disminuido en 0.1 unidades desde la era preindustrial, los arrecifes de coral han disminuido en un 50% en los últimos 30 años. Contaminación: más de 8 millones de toneladas de plástico entran en los océanos cada año, el 90% de la población mundial respira aire contaminado según estándares de la OMS.

una dictadura transitoria y limitada capaz de hacer frente a dicho peligro con rapidez y eficacia (Valim, 2018), debería cambiar y ser más acorde a los tiempos actuales, digamos más democrática, pero seguro este es el punto más polémico y conflictivo porque cuando pensamos la democracia la pensamos como algo complejo y lento, algo que toma tiempo. Pero ¿y si no tuviéramos tiempo y pudiéramos ya comenzar con las medidas pertinentes? Parece exótico, pero también parece razonable pensar un derecho preventivo, prospectivo y excepcional; pero en este sentido, en el del cambio urgente de cultura jurídica. En cualquier caso, vivimos durante la modernidad en estado de excepción permanentemente (Agamben, 2004).

Entonces, la desesperación como una vuelta de tuerca, como una revolución intelectual y moral. La desesperación como categoría hermenéutica que llame la atención, que siendo transversal permita reflexiones multidisciplinares.

La desesperación se caracterizaría por la falta de alternativas razonables para evitar el evento catastrófico³. Se considerarían las medidas ya tomadas o que podrían tomarse, incluyendo los avances científicos y tecnológicos disponibles, pero se determinaría por parte de la comunidad global que son insuficientes para prevenir el fin del mundo.

La categoría de “desesperación” abarcaría el padecimiento psicológico y emocional extremo que experimentaría la población ante la inminencia del fin del mundo. Este sufrimiento abarcaría el miedo a la muerte, la incertidumbre sobre el futuro, la desintegración social y la pérdida de esperanza.

En un contexto de desesperación, algunos principios jurídicos fundamentales, como la inviolabilidad de la vida o la prohibición del daño, podrían entrar en tensión o requerir reinterpretación; por eso debemos prevenir, para que eso no pase jamás.

Si realmente estamos en el fin del mundo necesitamos analizar cuidadosamente cómo se equilibrarían los principios excepcionales con la necesidad de preservar la dignidad y la autonomía de las personas, pero seguramente una sociedad egoísta difícilmente lo haría.

La “desesperación” podría justificar la creación de permisos y excepciones legales que no serían aplicables en circunstancias normales. Por ejemplo, se podría permitir la eutanasia voluntaria o asistida, la distribución equitativa de recursos escasos, o la toma de decisiones colectivas que afecten la vida de las personas.

3. Aunque tal vez modernidad signifique en el fondo crisis (Berlanga, 2013), por eso resulta tan difícil de evadirla porque supondría un estado de desesperación constante (Lipovetsky, Sebastien, & Prometeo - Moya, 2006). Pero justo ahí está la solución, en una resignificación tanto de modernidad como de crisis (Amengual, 1998).

En un escenario de fin del mundo, la justicia retributiva tradicional podría tener un alcance limitado. Se podría poner mayor énfasis en mecanismos de justicia restaurativa que busquen reconciliar a las personas, reparar los daños causados y promover la sanación colectiva antes del fin.

La definición de “desesperación” como categoría jurídica trataría de un estado de crisis social grave y generalizada que, por su intensidad excepcional y carácter extraordinario, amenaza la estabilidad del orden constitucional establecido, sobrepasando la capacidad de respuesta de los mecanismos ordinarios del Estado, y que potencialmente podría justificar la implementación temporal de medidas extraordinarias dentro de los límites constitucionales, siempre que exista evidencia objetiva de su necesidad y se mantengan las garantías fundamentales inderogables.

La implementación de un “derecho para el fin del mundo” debería garantizar el máximo respeto posible a los derechos y libertades fundamentales, incluso en un contexto de crisis extrema. Se tendría que encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden social y la protección de la autonomía individual en las decisiones de cada persona.

Un “derecho para el fin del mundo” efectivo requeriría un sistema jurídico que establezca mecanismos claros y escalonados de respuesta, manteniendo un equilibrio delicado entre la necesidad de preservar el orden social y el respeto irrestricto a un núcleo básico de derechos fundamentales inderogables. Esto se lograría mediante la implementación de salvaguardas institucionales robustas que incluyan controles judiciales permanentes, protocolos de actuación específicos, criterios estrictos de proporcionalidad para cada medida restrictiva, y sistemas de rendición de cuentas en tiempo real. El marco jurídico debería contemplar tanto la temporalidad de las medidas extraordinarias como vías efectivas de impugnación, garantizando la transparencia en la toma de decisiones y la participación ciudadana, mientras se mantiene la protección especial a grupos vulnerables y se asegura la existencia de mecanismos de compensación por afectaciones inevitables, todo ello bajo el principio rector de que incluso en las circunstancias más extremas, la dignidad humana y ciertos derechos fundamentales deben permanecer intactos.

La aplicación del “derecho para el fin del mundo” debería contar con mecanismos robustos para prevenir abusos y arbitrariedades. Se tendría que establecer un sistema de supervisión y rendición de cuentas que garantice que las medidas excepcionales se tomen de manera justa y transparente.

En definitiva, la “desesperación” como categoría jurídica en el contexto del derecho para el fin del mundo plantea desafíos complejos y exige un análisis profundo de las tensiones éticas y jurídicas que surgirían en un escenario de catástrofe global inminente. La elaboración de este marco legal

requeriría un esfuerzo colectivo de juristas, filósofos, científicos y otros expertos, con el objetivo de encontrar soluciones justas y compasivas para la humanidad en sus últimos momentos.

3. TRANSFORMANDO LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

Recientemente hemos escuchado y leído sobre la *ética del cuidado* (Gilligan, 2013), cuestión que resulta interesante a nuestro propósito de replantear la filosofía del derecho contemporánea, que normalmente se presenta como una teoría normativa (Vega, 2018), atrapada en el diseño del ordenamiento legal, haciendo pequeños ajustes de fontanería en el relacionamiento de las reglas. Sigue haciendo falta un marco ético centrado en las relaciones interpersonales, la empatía y la responsabilidad por el bienestar de los demás. Desde esta perspectiva, el cuidado mutuo se erige como un principio fundamental para construir sociedades justas y equitativas.

La filosofía del derecho actual, en gran medida, ha sido moldeada por principios liberales que enfatizan la autonomía y los derechos individuales (Marín, 1993). Si bien estos principios han contribuido a importantes avances en la protección de las libertades y la justicia, también han generado déficit en relación con proyectos societarios colectivos que involucren la responsabilidad social, aunque se insista en que el sistema jurídico es el mecanismo para mediar entre el individualismo y el altruismo: “En otras palabras, mientras la regla del derecho es expresión del individualismo que estructura la modernidad, el estándar se radica en la comunidad y en los valores compartidos y hace posible la mediación entre el individualismo y el altruismo...” (Faralli, 2007); pero, esto no es posible por la falta de conciencia social del operador jurídico (Atienza, 2023).

La corriente dominante en la filosofía del derecho tiende a priorizar los derechos individuales sobre las responsabilidades sociales por la gran dificultad que entraña la positivización de éstas (Ferrajoli, 2010) (D’Ágostino, 2007). Esto puede conducir a una visión del mundo en la que las personas se enfocan principalmente en proteger sus propios derechos, sin considerar adecuadamente las necesidades y los derechos de los demás, ya que eso propiamente no atañe al derecho según estas concepciones (Suárez Llanos, 2018).

La filosofía del derecho actual no suele reconocer ni valorar el trabajo de cuidado como una práctica social en tanto que se enfoca en el diseño legal e institucional. Esto invisibiliza la importancia de otros fenómenos igual de importantes que llevarían a concebir un derecho transformador (Suárez Llanos, 2018).

El individualismo exacerbado puede fomentar una cultura de competencia y desconfianza, donde las personas se ven como rivales en lugar de colaboradores. Esto dificulta la construcción de comunidades solidarias y resilientes.

La ética del cuidado ofrece una perspectiva diferente, proponiendo un enfoque moral basado en las relaciones interpersonales, la empatía y la responsabilidad por el bienestar de los demás (Fascioli, 2010). Desde esta perspectiva, el cuidado mutuo se convierte en un principio fundamental para construir sociedades justas y equitativas.

Es fundamental reconocer que todos estamos interconectados y que nuestro bienestar depende del de los demás. La sociedad debe valorar el cuidado en todas sus formas, tanto el directo como el indirecto, considerándolo un trabajo esencial. Resulta imperativo asumir la responsabilidad de cuidar a los demás, especialmente a los más vulnerables (Busquets, 2019). La distribución justa del trabajo de cuidado y el acceso universal a los recursos y apoyos necesarios para brindar y recibir cuidado constituyen elementos clave para una sociedad equitativa.

4. DERECHO AL CUIDADO MUTUO

Incorporar la *ética del cuidado* en la filosofía del derecho implica un cambio de paradigma, desde una visión centrada en los derechos individuales hacia una que valore las relaciones interpersonales y la responsabilidad social.

El principal reto sería reconceptualizar los derechos como interdependientes y vinculados a las responsabilidades de cuidado mutuo (García García, 1999). Fomentar la colaboración y la solidaridad entre individuos, comunidades e instituciones para construir un sistema de cuidado mutuo.

La ética del cuidado ofrece una base sólida para transformar la filosofía del derecho actual y construir un orden jurídico que promueva el cuidado mutuo, la justicia social y el bienestar colectivo. Si bien este cambio requiere un esfuerzo significativo, es fundamental para avanzar hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos (Arias Campos, 2007).

El cuidado, en todas sus formas, debe ser reconocido como un trabajo esencial para el bienestar individual y colectivo. Esto implica valorar tanto el cuidado directo (como el que brindan las familias y cuidadores profesionales) como el indirecto (como el trabajo doméstico y comunitario).

La responsabilidad del cuidado no debe recaer desproporcionadamente sobre ciertos grupos, como las mujeres o las personas de bajos ingresos. Se deben implementar políticas y estructuras sociales que promuevan una

distribución equitativa del trabajo de cuidado, permitiendo que todos participen plenamente en la sociedad.

Podríamos formularlo como un derecho subjetivo, un derecho al cuidado mutuo reconociendo previamente nuestra interdependencia como seres humanos y nuestra responsabilidad compartida por el bienestar colectivo y el medio ambiente (García García, *Derechos Humanos y calidad de vida*, 1999). Esto implica fomentar la solidaridad, la cooperación y la construcción de comunidades resilientes, colaborativas y plurales.

Las redes de apoyo comunitario requieren fortalecimiento, mientras la participación ciudadana en iniciativas de cuidado mutuo demanda mayor impulso. En este momento, nuestra tarea primordial consiste en repensar el concepto de comunidad.

Una teoría del derecho al cuidado mutuo basada en la ética del cuidado ofrece un marco sólido para construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles. Al reconocer el valor del cuidado, distribuirlo de manera justa, podemos avanzar hacia un mundo donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida plena y significativa.

5. LA COMUNIDAD COMO FUNDAMENTO DE LO CONSTITUCIONAL

La comunidad emerge como un actor fundamental en la construcción de un derecho coexistencial que permitiría lograr la tan anhelada sustentabilidad; a partir de los principios de la ética del cuidado podríamos plantear una idea diferente desde el derecho para la articulación de un modelo de organización social distinto (Villoro, 2003).

Dicho de otra manera, para que la comunidad se convierta en el centro de un nuevo constitucionalismo, debemos buscar nuevos modelos hermenéuticos, porque por ahora al centro está el individuo, además como una abstracción poco asible.

El constitucionalismo del futuro debe reconocer a la comunidad como un sujeto de derecho, con capacidad para participar en la toma de decisiones; debemos superar de inmediato todo tipo de postura ilustrada que deja en manos de unos cuantos el destino y futuro de todos.

Es fundamental establecer mecanismos efectivos para la participación comunitaria en la elaboración de leyes y políticas públicas que afecten a sus vidas. Esto puede incluir consultas públicas, audiencias ciudadanas y procesos de deliberación comunitaria, darle forma y vida a la democracia participativa⁴.

4. Para abundar más sobre el particular véase: (Narváez, 2023).

El constitucionalismo del futuro debe respetar y proteger la autonomía y el autogobierno de las comunidades, reconociendo su capacidad para gestionar sus propios asuntos y tomar decisiones sobre su futuro porque, siendo honestos, el constitucionalismo actual tiene poco interés en las comunidades reales y la representación política no ha funcionado del todo, así que habría que descentralizar el poder y fortalecer las capacidades locales para la gobernanza comunitaria.

La ética del cuidado debe guiar la toma de decisiones en las comunidades, priorizando el bien común por sobre los intereses individuales.

Esto implica fomentar la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad compartida entre los miembros de la comunidad.

El constitucionalismo del futuro debe garantizar la protección de los derechos colectivos, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al acceso al agua y la tierra, y el derecho al desarrollo cultural. Esto implica reconocer la interdependencia entre los individuos y la comunidad, y la necesidad de proteger los recursos naturales y el patrimonio cultural para las generaciones futuras.

Un constitucionalismo que tenga en cuenta la justicia intergeneracional, asegurando que las decisiones actuales no perjudiquen las oportunidades y el bienestar de las generaciones futuras.

Esto implica adoptar un enfoque preventivo y sostenible en la gestión de los recursos naturales y el desarrollo social. Un constitucionalismo preventivo, pero también promovente del diálogo intercultural y el respeto a la diversidad, reconociendo la validez de las cosmovisiones y prácticas de las distintas comunidades. Esto implica fomentar la tolerancia, la inclusión y la construcción de una sociedad multicultural justa y equitativa.

En América Latina, el constitucionalismo plurinacional ha surgido como un movimiento que reconoce los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, colocando a las comunidades en el centro de la organización estatal.

En Europa, el reconocimiento de los derechos de las comunidades locales y minorías ha impulsado el desarrollo de enfoques participativos en la gestión ambiental y el desarrollo rural.

La ética del cuidado y el reconocimiento de la comunidad como sujeto de derecho ofrecen un marco sólido para construir un constitucionalismo más justo, sostenible y respetuoso con la diversidad. Al colocar a la comunidad en el centro, este enfoque jurídico puede contribuir a la construcción de sociedades más resilientes, equitativas y armónicas con el entorno natural.

6. LOS BIENES COMUNES EN EL FUTURO PRÓXIMO

La noción de “bienes comunes” está experimentando una revitalización en el debate político y jurídico contemporáneo (Lloredo Alix, 2020). En un futuro constitucionalismo anclado en la ética del cuidado y la participación ciudadana, los bienes comunes adquieren una relevancia especial.

Los bienes comunes son aquellos recursos que, por su naturaleza, son compartidos por una comunidad y son indispensables para la vida y el bienestar de sus miembros. Estos pueden ser tangibles (agua, aire, tierra) o intangibles (conocimiento, cultura, biodiversidad) (Ostrom, 2000).

La ética del cuidado, que enfatiza las relaciones interdependientes y la responsabilidad mutua, ofrece un marco conceptual valioso para entender y proteger los bienes comunes. Al centrarse en el bienestar de todos los miembros de la comunidad, esta ética promueve una gestión sostenible y equitativa de los recursos compartidos (D’Álisa, 2006).

Es necesario reconocer que el bienestar individual está ligado al bienestar colectivo (este último debería ser la suma de aquellos bienestares individuales) y que la protección de los bienes comunes es esencial para garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras (Houtart, 2014), el sistema jurídico en su totalidad, y el constitucionalismo deberán promover un sentido de responsabilidad compartida hacia los bienes comunes, fomentando prácticas que aseguren su preservación y restauración.

La educación jurídica y la cívica, en todos los niveles, tendría que fomentar de manera transversal la capacidad de ponerse en el lugar de otros y comprender las necesidades y las perspectivas de aquellos que pueden ser más vulnerables o afectados por la degradación de los bienes comunes.

Una comunidad políticamente activa es fundamental para la protección y la gestión efectiva de los bienes comunes. La participación ciudadana permite a los individuos involucrarse en la toma de decisiones que afectan sus vidas y el entorno compartido. Este entorno supone espacios de deliberación y decisión en los que los ciudadanos pueden discutir y proponer soluciones para los desafíos relacionados con los bienes comunes, además de procesos en los que los ciudadanos tienen la oportunidad de decidir cómo se asignan los recursos públicos, priorizando proyectos que beneficien a la comunidad, y la conformación de órganos de representación local que permitan a los ciudadanos participar en la gestión de los asuntos de su barrio o comunidad. Todo este *corpus* de derechos a la participación política, son una manera de materializar a diario no sólo la democracia sino también un orden constitucional. Es vital garantizar la protección constitucional de los bienes comunes y establecer mecanismos para su gestión y protección a largo plazo, incorporando principios como la sostenibilidad,

la equidad y la justicia intergeneracional en la Constitución, orientando así la toma de decisiones en materia de bienes comunes (Falconí Loqui, 2020).

Se trata de establecer derechos de acceso y uso a los bienes comunes, garantizando que todos los miembros de la comunidad puedan beneficiarse de ellos de manera equitativa (Miccù, 2016), a través de mecanismos para monitorear el estado de los bienes comunes y asegurar que su gestión sea transparente y responsable.

La idea de bienes comunes, al ser integrada en un constitucionalismo del futuro basado en la ética del cuidado y la participación ciudadana, ofrece una visión más inclusiva, equitativa y sostenible para el futuro de nuestras sociedades. Al reconocer la interdependencia entre los individuos y el entorno, y al promover la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, podemos construir un futuro en el que los bienes comunes sean protegidos y valorados como un patrimonio común para las generaciones presentes y futuras.

7. DERECHO DEL FUTURO: ECOCONSTITUCIONALISMO

El paso de la teoría de los bienes comunes al ecoconstitucionalismo requiere una transformación profunda del ordenamiento jurídico, donde la naturaleza trascienda su conceptualización como mero bien común para constituirse en sujeto de derechos fundamentales. Esta evolución demanda la incorporación de principios biocéntricos en el núcleo constitucional, el establecimiento de garantías específicas para la protección ambiental, y la creación de mecanismos efectivos de tutela jurídica, respaldados por instituciones especializadas y una robusta participación ciudadana en la defensa de los derechos de la naturaleza.

Un ecoconstitucionalismo, como una corriente jurídica que buscaría integrar los principios de la protección ambiental en las constituciones del mundo, incorporando la ética del cuidado y el enfoque comunitario en el ecoconstitucionalismo, podemos avanzar hacia un nuevo derecho coexistencial que promueva la armonía entre las personas y el medio ambiente.

El constitucionalismo debe reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, otorgándole protección legal y garantizando su preservación para las generaciones futuras. La relación entre las personas y la naturaleza debe basarse en la ética del cuidado, promoviendo la responsabilidad compartida por el bienestar del planeta y la sostenibilidad ambiental. El ecoconstitucionalismo debe adoptar el principio de precaución, tomando medidas preventivas ante posibles daños ambientales, incluso si la evidencia científica aún no es concluyente extremar precauciones debe ser nuestro

principal propósito, claro está que esto supone un gran enfrentamiento con el capitalismo que tendrá que librarse de manera inteligente y estratégica, pero sin duda desde el derecho.

El ecoconstitucionalismo debe promover la justicia ambiental, abordando las desigualdades en el acceso a recursos naturales y la distribución de los impactos ambientales, garantizando la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre la gestión ambiental, reconociendo el conocimiento local y las necesidades de las comunidades.

Este enfoque ecocéntrico supone la valoración de la naturaleza en sí misma, más allá de su utilidad para los humanos, renunciando a una visión meramente instrumental y utilitarista. La Constitución de Ecuador de 2008 reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, incluyendo el derecho al agua, el aire limpio y un ambiente sano. La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido los derechos de la naturaleza en diversos fallos, protegiendo ecosistemas frágiles y ordenando medidas para prevenir daños ambientales. La Constitución de India reconoce el derecho a un medio ambiente sano como un derecho fundamental, y el Tribunal Supremo ha emitido órdenes para proteger ríos y bosques⁵.

El ecoconstitucionalismo, integrado con la ética del cuidado y el enfoque comunitario, ofrece un marco legal sólido para construir un nuevo derecho coexistencial que promueva la armonía entre las personas y el medio ambiente. Al reconocer los derechos de la naturaleza, fomentar la responsabilidad compartida por el planeta y garantizar la participación comunitaria en la toma de decisiones ambientales, podemos avanzar hacia un futuro más sostenible y justo para todos.

5. Sentencia T-622 de 2016: Reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, estableció su protección, conservación y restauración; creó la figura de guardianes del río; ordenó la limpieza del río y el fin de la minería ilegal. Sentencia STC 4360 de 2018 (Amazonia): Declaró a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos, ordenó frenar la deforestación; estableció la creación de un plan intergeneracional; reconoció derechos de las generaciones futuras. Sentencia T-445 de 2016: Sobre consultas populares en temas mineros; reconoció derechos ambientales de comunidades locales; estableció límites a actividades extractivas. Sentencia C-032 de 2019: Protección animal como parte del ambiente; reconocimiento de derechos a los animales; limitaciones al uso de animales en actividades humanas. Sentencia T-361 de 2017: Protección de páramos, reconocimiento como ecosistemas esenciales; estableció límites a actividades económicas en páramos. STC 3872 de 2020: Declaró al Parque Nacional Los Nevados como sujeto de derecho; ordenó su protección especial; estableció medidas para su conservación.

8. LA CONSTITUCIÓN DE LA MADRE TIERRA

Hay un furor desmedido detrás de la propuesta para una Constitución de la Tierra (Ferrajoli, *Por una constitución de la Tierra: La humanidad en la encrucijada*, 2022) con la que incluso mucho de lo escrito aquí podría estar en sintonía, pero encuentro varias cosas que me resultan contraintuitivas de la proposición. Me parece que apelar a globalizar un modelo occidental que evidentemente fracasó podría ser el enésimo intento colonialista por ofrecer una solución arquetípica comercializable, un *United Colors of Benetton* para la teoría jurídica, suena mucho a apropiación cultural, un tipo de extractivismo constitucional.

En América Latina (Abya Yala) venimos hablando de la Constitución de la Madre Tierra (Pachamama) desde hace un buen rato (Achury, Parra Acosta & Rosso Gauta, 2022), considerando primordialmente que se trata de una llamada de atención y una aportación proveniente de los pueblos originarios que detectaron desde hace bastante tiempo el grave peligro medioambiental que vivimos a causa de un desenfrenado consumismo. De ahí surgieron propuestas híbridas, mestizas que utilizaron el lenguaje de la teoría constitucional para formular propuestas concretas, incluso algunas de ellas oficiales (Lozano Bustamante, 2022).

En las propuestas del denominado nuevo constitucionalismo andino (Yrigoyen Fajardo, 2006) había una clara referencia a una filosofía ancestral basada en el buen (con)vivir, con una marcada tendencia pacifista, comunitarista, compositiva y sustentable (Tórtora Aravena, 2021); pero hay que decirlo con todas sus letras, el constitucionalismo tradicional demasiado eurocéntrico se interesó poco por esos planteamientos, los cuales poco atendió y poco discutió⁵ (Pegoraro, 2014). Los constitucionalistas latinoamericanos muy avezados en el constitucionalismo europeo también mal miraron la propuesta, que quedó como algo exótico.

Pero ahora todos aplauden una propuesta planetaria más por un argumento de autoridad que por el contenido mismo. No se trata de quién lo dijo primero sino de quién lo puede decir mejor, de quién lo concibe mejor, y sin duda ese quién son los pueblos originarios que desde siempre han materializado esa idea, y a través de la resistencia han mantenido su filosofía y estilo de vida.

Creo que si nos liberamos de las odiosas categorizaciones y los prejuicios culturales podríamos encontrar modelos societarios muy interesantes, incluso más allá del simplón constitucionalismo; pero si aún esta generación insiste en la idea entonces llamémosle por su nombre completo, por una Constitución para la Madre Tierra, por un ordenamiento cósmico que respete el espacio que habitamos y a las distintas culturas que lo habitan,

no sólo por moda o para hacer una nueva marca, sino por una necesidad de subsistencia coexistencial.

9. A MODO DE CONCLUSIÓN: POSDEMOCRACIA Y FIN DEL MUNDO

La posdemocracia, como un sistema político, si bien mantiene las apariencias formales de la democracia, ha experimentado una profunda transformación en su sustancia. Los mecanismos de representación se debilitan, la participación ciudadana se reduce y las élites económicas y políticas adquieren un poder desproporcionado.

Los sistemas posdemocráticos, centrados en el crecimiento económico a corto plazo y en los intereses de las élites, suelen ser renuentes a adoptar medidas drásticas para combatir el cambio climático y la degradación ambiental. Esta inacción podría llevar a catástrofes ecológicas de gran escala, poniendo en peligro la supervivencia de la humanidad.

La concentración de la riqueza y el poder en pocas manos genera resentimiento social, polarización y un aumento de los conflictos. Esta dinámica puede desestabilizar los sistemas políticos y conducir a crisis humanitarias de gran magnitud.

La erosión de los contrapesos institucionales, la manipulación de los medios de comunicación y la polarización política debilitan la capacidad de las democracias para responder a los desafíos globales y garantizar la estabilidad.

En un contexto de crisis y desconfianza en las instituciones, los líderes populistas autoritarios encuentran un terreno fértil para sus discursos simplistas y sus promesas de restaurar el orden.

La conexión entre posdemocracia y el “fin del mundo” no es determinista, la humanidad ha enfrentado crisis similares en el pasado y ha logrado superarlas. Sin embargo, la magnitud y complejidad de los desafíos actuales requieren una respuesta global y coordinada que parece difícil de alcanzar en un contexto de creciente fragmentación y rivalidad entre las grandes potencias.

Necesitamos entonces un sistema societario donde la vida sea el punto de partida. Donde todos los seres vivos cuenten, donde los seres sintientes tengan un espacio y haya un afán común por la subsistencia. La biocracia⁶

6. La biocracia puede definirse como un sistema político-jurídico y modelo de gobernanza donde la vida en todas sus manifestaciones (humana y no humana) se constituye como el principio fundamental de organización social y política. Este sistema reconoce la interdependencia vital entre todas las formas de vida y coloca al equilibrio ecosistémico como eje central de la toma de decisiones y la construcción normativa.

(Narváez, 2023) podría ser la solución ante el desgaste que han sufrido conceptos como Estado y Democracia.

En el denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, arriba citado, encontramos cierta intuición acerca de estos temas, imagino que en este punto perderé la atención de algunos lectores que dirán que esos modelos fracasaron, pero en realidad fracasaron porque siguieron el mismo camino, dejando de lado a la sociedad y haciendo que la clase política lo operara, además de que esos modelos han enfrentado con poco éxito al capitalismo y el poder corporativo (Salazar Ugarte, 2013).

Lo que tenemos que aprovechar de esas intuiciones son los planteamientos disruptivos de democracia directa y participación política ciudadana, pero para ello es necesario un cambio cultural cuya semilla parece estar germinando en nuestras sociedades posdemocráticas. Aún de manera muy burda, atisbamos que la solución no está en el Estado y mucho menos en la clase política, y que por ello es necesario involucrarnos. Paradójicamente, urge democratizar la democracia (Sartori, R., & Vallespin, 1999) pero, además, los retos siguen siendo los mismos: defender los derechos civiles y políticos, promover la participación ciudadana, y exigir transparencia y rendición de cuentas a los gobiernos; impulsar políticas fiscales progresivas, invertir en educación y salud, y garantizar un trabajo digno para todos; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, promover las energías renovables, y proteger la biodiversidad; construir un orden mundial más justo y equitativo, basado en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional.

La posdemocracia plantea serios desafíos para la humanidad. Sin embargo, no estamos condenados a un futuro sombrío. Al tomar conciencia de los riesgos y actuando de manera colectiva, podemos construir un futuro más justo y sostenible para todos. Quizá ya es tarde pero como dicen: es mejor tarde que nunca.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albert, R. (1 de Abril de 2024). *LinkedIn*. Obtenido de LinkedIn: https://www.linkedin.com/search/results/content/?fromMember=%5B%22ACoAAACfv3YBqGXQGSJh7RmX5T6IO8IHvVr-MM%22%5D&keywords=Richard%20Albert%20special%20announcement&origin=FACETED_SEARCH&sid=VjC
- Achury, L. E., Parra Acosta, L., & Rosso Gauta, M. C. (2022). La Pachamama o la naturaleza como sujeto de derechos. Asimetrías en el constitucionalismo del “buen vivir” de América Latina. *Saber, Ciencia y Libertad*, 42-69.
- Agamben, G. (2004). *Stato si eccezione. Homo sacer II, I*. Torino: Bollari Boringhieri.

- Amengual, G. (1998). *Modernidad y crisis del sujeto: hacia la construcción del sujeto solidario*. Madrid: Caparrós Editores.
- Arias Campos, R. L. (2007). Aportes de una lectura en relación con la ética del cuidado y los derechos humanos para la intervención social en el siglo XXI. *Dialnet*, 25-36.
- Atienza, M. (2023). *Filosofía del Derecho y transformación social*. Madrid: Trotta.
- Blomkamp, N. (dirección) (2013). *Elisyum* [Película].
- Bauman, Z. (2007). *Miedo líquido*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Berlanga, J. L. (2013). Crisis: ensayo de definición. *Vínculos de Historia* 2, 121-140.
- Busquets, M. (2019). Descubriendo la importancia ética del cuidado. *Folia humanística* 12, 20-39.
- D'Álisa, G. (2006). Bienes comunes: las estructuras que conectan. *La evolución de las instituciones de acción colectiva* 2, 361.
- D'Ágostino, F. (2007). *Filosofía del derecho*. Bogotá: Javier Temis.
- Falconí Loqui, E. P. (2020). Análisis de los derechos de la naturaleza contemplados en la Constitución desde el enfoque de los bienes comunes. Quito, Ecuador: MS thesis.
- Faralli, C. (2007). *La filosofía del derecho contemporánea*. Colombia: Universidad Externado.
- Fascioli, A. (2010). Ética del cuidado y ética de la justicia en la teoría moral de Carol Gilligan. *Revista Actio* 12, 41-57.
- Ferrajoli, L. (2010). *El garantismo y la filosofía del derecho*. Colombia: Universidad Externado.
- Ferrajoli, L. (2022). *Por una constitución de la Tierra: La humanidad en la encrucijada*. Madrid: Trotta.
- García García, E. (1999). Derechos humanos y calidad de vida. Madrid: Universidad Complutense.
- García García, E. (1999). Derechos Humanos y calidad de vida. En G. González R. Arnaiz, & E. Trias, *Derechos humanos: la condición humana en la sociedad tecnológica* (págs. 131-163). Tecnos.
- Gilligan, C. (2013). Cuadernos de la Fundació Victor Grífols i Lucas. *La ética del cuidado*. Barcelona, España: Fundació Víctor Grífols i Lucas.
- Houtart, F. (2014). De los bienes comunes al bien común de la humanidad. *El ágora USB* 14.1, 258-293.
- Lipovestky, G. y. (2008). *La sociedad de la depresión*. Barcelona: Anagrama.
- Lipovetsky, G., Sebastien, C., & Prometeo - Moya, A. (2006). *Los tiempos hipermodernos*. Barcelona: Anagrama.
- Lloredo Alix, L. M. (2020). Bienes comunes. *Eunomía. Revista en cultura de la legalidad*, 214-236.
- Lozano Bustamante, J. J. (2022). La naturaleza como sujeto de derechos: reflexiones en torno al constitucionalismo andino. *Tesla Revista Científica* 2.2.
- Marín, R. (1993). Concepto de filosofía del derecho. *Anuario de filosofía del derecho*, 175-190.

- Miccù, R. (2016). Constitución y bienes comunes en la época de la crisis: el estatuto jurídico del agua. *Itinerarios constitucionales para un mundo convulso*, 225-249.
- Morton, T. (2021). *Hiperobjetos: filosofía y ecología después del fin del mundo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Narváez H., J. (08 de febrero de 2023). Axis, Escuela Judicial Electoral, México. *Hablemos de Biocracia*.
- Narváez H., J. R. (Marzo de 2023). *Revista Derecho del Estado, Universidad del Externado de Colombia*. Obtenido de Revista Derecho del Estado, Universidad del Externado de Colombia: <https://blogrevistaderechoestado.edu.co/2023/03/29/el-estado-posdemocratico-2/>
- Ostrom, E. (2000). *El gobierno de los bienes comunes. La evolución de acción colectiva*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Fondo de Cultura Económica.
- Pegoraro, L. (2014). Diritto, diritto comparato, altre scienze nello studio del nuovo costituzionalismo andino e del buen vivir. Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea. *FILODIRITTO EDITORE*, 389-405.
- Salazar Ugarte, P. (2013). El nuevo constitucionalismo latinoamericano (una perspectiva crítica). *El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo*, 345-387.
- Sartori, G., R., D., & Vallespin, F. (1999). El futuro de la democracia. *Claves de la razón práctica* 97, 49.
- Suárez Llanos, L. (2018). *El posmodernismo jurídico y la filosofía del derecho*. España: Tirant Lo Blanch.
- Tórtora Aravena, H. (2021). En “Buen Vivir” y los derechos culturales de naturaleza colectiva en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano Descolonizador. *Revista de derecho (Coquimbo)* 28.
- Valim, R. (2018). Estado de excepción. La forma jurídica del neoliberalismo. *Derechos en acción*, 438.
- Vega, J. (2018). la filosofía del Derecho como filosofía práctica. *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 34.
- Villoro, L. (2003). *De la libertad a la comunidad*. Ciudad de México: ITESM.
- Yrigoyen Fajardo, R. (2006). Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino. *Pueblos indígenas y derechos humanos.*, 537-567.